



confederación sindical de comisiones obreras
Secretaría General | Gabinete Económico Confederal
Fernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid. Tel.: 917028018

| www.ccoo.es

INFORME DE COYUNTURA LABORAL. FEBRERO 2019

Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras

4 de febrero de 2019

Febrero trae más empleo pero también más paro y brecha de género

El mercado laboral ofrece unos datos desiguales en febrero (sube el empleo, pero también el paro) que empeoran cuando se analizan con mayor detalle las brechas de género que mantiene nuestro mercado de trabajo.

En febrero sube el empleo en 69.172 personas y el paro registrado sube en 3.279 personas. Estos datos son peores que los de febrero de 2018, cuando se creó más empleo y el paro bajó ligeramente, en un contexto de mayor crecimiento económico. El reto es lograr que esta creación de empleo se traduzca y consolide en empleo de calidad, reduciendo la enorme precariedad que caracteriza el mercado de trabajo en España y que se ceba en mayor medida en las mujeres, población joven e inmigrantes.

El repunte del paro en febrero se ceba con las mujeres: 6 de cada 10 personas en paro son mujeres (hay 1.928.815 mujeres en paro). En febrero el aumento del paro se concentra exclusivamente en las mujeres, con un leve descenso entre los hombres.

La protección frente al desempleo registra una brecha de género de 11 puntos porcentuales: en diciembre, la tasa de cobertura de las mujeres (57%) es once puntos inferior a la de los hombres (68%). En Comisiones Obreras insistimos en la necesidad de adoptar medidas de calado para combatir que la cara del desempleo, la precariedad y la pobreza siga siendo femenina.

La contratación temporal supone 9 de cada 10 contratos firmados. Es imprescindible la modificación de los artículos 15 y 42 del Estatuto de los trabajadores para revertir los efectos nocivos que se mantienen por la reforma laboral del PP.

La rotación laboral está en máximos. Además del dato de contratos firmados (9 de cada 10 temporales) importa mucho más su duración media: se firman muchos contratos de muy corta duración que apenas se traducen en empleo. En los nueve primeros meses de 2018, el 40% de los contratos firmados tenía una duración inferior a 1 mes, pero solo el 1% de la población asalariada trabajaba con contratos de duración inferior al mes.

Pero la rotación y la precariedad no son exclusivas de la contratación temporal, y tras la reforma laboral de 2012 la contratación indefinida se ha precarizado y cada vez sirve menos para acceder a un empleo estable. Con los datos del cierre de 2018 solo se mantenían el 63% de los contratos indefinidos firmados en 2018 y el 50% de los contratos indefinidos de 2017.

Comisiones Obreras defiende cambios del modelo productivo y laboral para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de salarios y pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social. El objetivo es sacar a la economía de su patrón tradicional de bajo valor añadido, aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción.

La precariedad laboral es la Marca España

La precariedad laboral (la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones dignas de vida) afecta a la mayoría de la población trabajadora. El indicador más grave es la alta tasa de paro, agravada por su larga duración y el agotamiento de las prestaciones por desempleo, pero hay otros muchos indicadores de la precariedad: la desigualdad laboral, la brecha de género, la alta temporalidad, las jornadas parciales, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de salud laboral y de accidentes de trabajo. El descenso del paro se está produciendo a costa de la menor calidad y mayor precariedad del empleo generado.

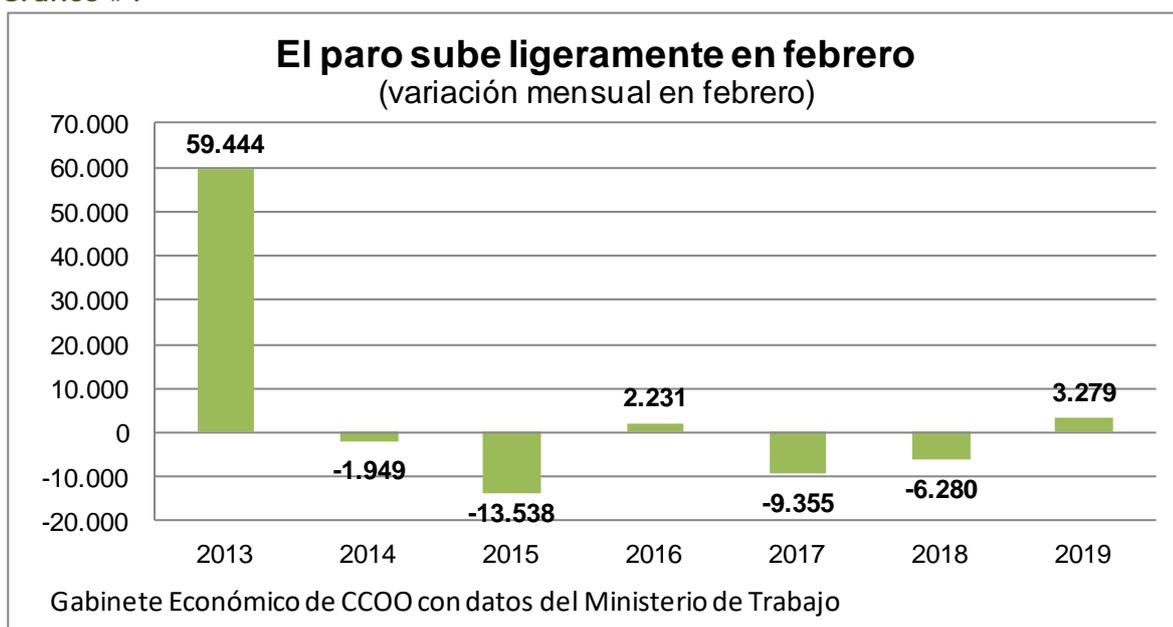
1. El paro sube en febrero y mantiene su alta feminización

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo sube en 3.279 personas en febrero y se sitúa en 3.289.040 (baja en 10.445 personas en términos desestacionalizados). La bajada interanual del paro se modera hasta 181.208 personas, cuando en febrero de 2018 bajaba en 280.000 personas. El paro baja en servicios (-7.581), industria (-2.304) y construcción (-4.647) y sube en agricultura (9.885) y en el colectivo sin empleo anterior (7.926).

En España 6 de cada 10 personas en paro son mujeres: hay 1.928.815 mujeres y 1.360.225 hombres en paro. En febrero el paro sube entre las mujeres (3.502) y baja ligeramente entre los hombres (-223). En términos interanuales el descenso del paro es mayor entre los hombres (-112.145) que entre las mujeres (-69.063). En febrero el paro sube entre la población menor de 25 años (10.935 personas) y baja entre las personas de 25 y más años (-7.656). La población extranjera en paro sube en 3.587 personas este mes, aunque mantiene un descenso interanual de 17.844 y un total de 405.375 personas en paro, en su mayoría mujeres (58%), mayores de 25 años (93%), que han trabajado antes en el sector servicios (62%) y proceden de un país extracomunitario (64%).

En febrero había 3.519.734 personas no ocupadas buscando trabajo: 3,289 millones en paro más otras 230.694 personas no ocupadas que buscan trabajo. Además, hay 1.083.467 personas que busca una mejora de empleo, un empleo especializado o tiene disponibilidad limitada. En total, 4.603.201 personas buscan trabajo mediante los servicios públicos de empleo.

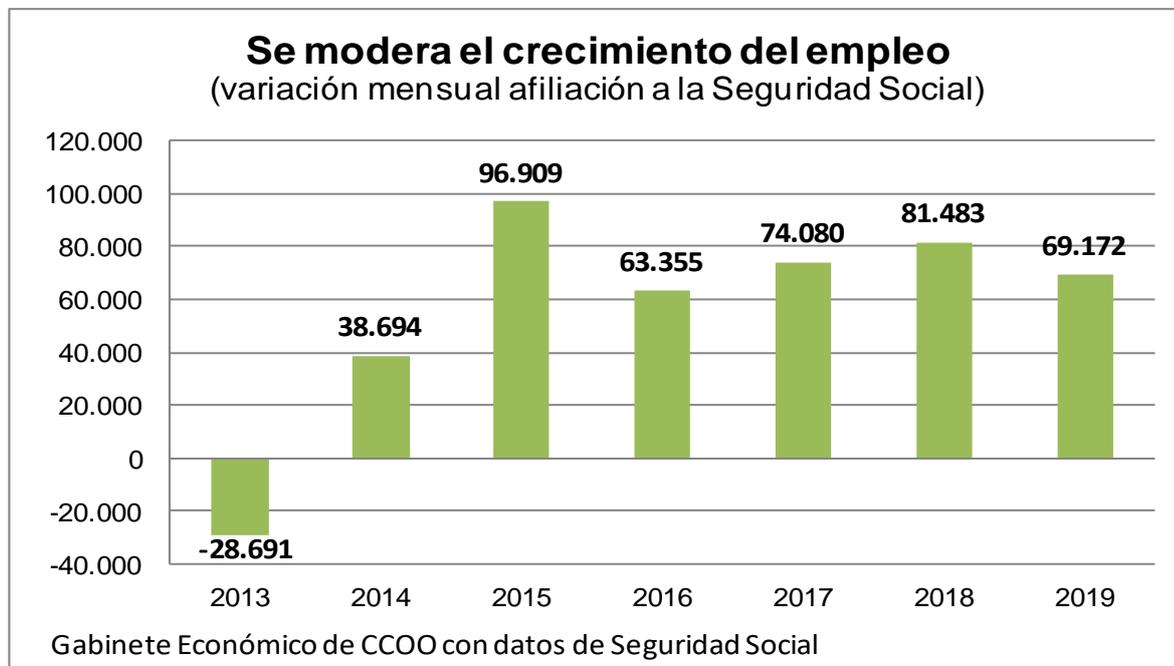
Gráfico #1



2. En febrero crece la afiliación pero se modera su avance interanual

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 18.888.472 personas (el 46,3% son mujeres y el 10,5% población extranjera) tras subir en 69.172 personas en febrero (ver gráfico #2) y un crecimiento anual del empleo de 524.958 personas (2,86%). En términos desestacionalizados la afiliación sube en 38.833 personas en febrero. El elevado volumen de altas y bajas en afiliación a la Seguridad Social evidencia la fragilidad del empleo: el 28 de febrero 104.213 personas fueron dadas de baja en afiliación en términos netos.

Gráfico #2



El dato de febrero modera el crecimiento interanual de la afiliación hasta el 2,86% (ver Gráfico #3), una décima por debajo del crecimiento del empleo en la EPA (2,98% en el 4t2018) y ambos por encima del PIB (2,4% en el 4t2018). Los datos de afiliación sobreestiman la creación del empleo por un efecto estadístico: en el sector público las altas se registran en el régimen general de la Seguridad Social, pero gran parte de las bajas se apuntan a clases pasivas.

Tabla #1

Más de la mitad del empleo asalariado es precario en España

Población afiliada al Régimen General de la Seguridad Social por tipo de contrato
(Excluidos los sistemas especiales Agrario y de Empleados de Hogar)

AÑO	Contrato indefinido			Contrato temporal		Formación y prácticas	Otros
	Completa	Parcial	Fijo discontinuo	Completa	Parcial		
2007	49,8%	7,4%	1,4%	26,0%	8,0%	1,3%	6,1%
2009	53,1%	8,7%	1,7%	19,7%	8,4%	1,0%	7,3%
2011	51,9%	9,6%	1,9%	17,6%	9,6%	1,0%	8,4%
2013	51,6%	10,8%	2,2%	15,1%	11,0%	1,1%	8,2%
2014	50,0%	11,0%	2,3%	15,7%	11,3%	1,5%	8,2%
2015	48,9%	11,0%	2,3%	16,7%	11,3%	1,8%	7,9%
2016	48,4%	11,0%	2,4%	17,4%	11,4%	1,7%	7,7%
2017	47,9%	11,0%	2,4%	18,4%	11,4%	1,4%	7,5%
2018	48,2%	11,2%	2,5%	18,7%	11,0%	1,2%	7,3%

Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de los datos de la Seguridad Social

La población trabajadora cada vez soporta peores condiciones laborales y más de la mitad del empleo es precario (ver Tabla #1). Menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a jornada completa (48%) y la mayoría (52%) presenta algún tipo de precariedad: contrato temporal, trabajo por horas o ambos. El empleo indefinido a jornada completa empezó a perder peso al inicio de la recesión por el avance de la jornada parcial y posteriormente por el repunte del empleo temporal. En 2007 el rasgo principal de la precariedad era el carácter temporal del contrato, en 2018 el uso de la jornada parcial es también un rasgo muy representativo.

La EPA confirma la precariedad de gran parte del empleo generado en la recuperación: se han creado 2,43 millones de empleos (4t2013-4t2018), casi todos empleos asalariados (2,36 millones) de los que la mitad son temporales y/o a jornada parcial (1,14 millones). La tasa de temporalidad ha repuntado hasta el 27% y el trabajo a jornada parcial concentra el 16% del empleo asalariado: ya hay 5,9 millones de personas con contrato temporal y/o jornada parcial.

3. Modelo de crecimiento y de precariedad

El grueso del PIB está formado por la demanda interna agregada y su principal componente es el consumo interno, seguido a gran distancia por la inversión. Para impulsar el consumo interno es imprescindible el crecimiento del empleo y, sobre todo, de los salarios medios. La recuperación de la inversión depende de la confianza del sector privado en la sostenibilidad de la actual fase de crecimiento y de la recuperación del gasto y la inversión pública tras años de recortes.

La precariedad laboral, en sus diferentes formas, afecta a la mayoría de la clase trabajadora y ha aumentado durante la crisis: temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, siniestralidad laboral. La etapa de crecimiento ligada a la burbuja inmobiliaria se caracterizó por el aumento de la precariedad y la desigualdad. La recesión y la larga crisis dispararon aun más los niveles de desigualdad y pobreza laboral. La actual etapa de crecimiento viene marcada por el fuerte repunte de beneficios y dividendos y la precariedad del empleo creado, lo que aumenta la desigualdad y lastra las posibilidades de desarrollo.

La creación de empleo en España sigue concentrada en ramas poco productivas del sector privado, donde lentamente van ganando peso sectores y actividades de mayor valor añadido y con poca contribución del empleo público. La recuperación económica reactivó la creación de empleo desde finales de 2013, apoyada en factores coyunturales (“vientos de cola”) como la bajada del precio del petróleo, la devaluación del euro, la política expansiva del Banco Central Europeo que redujo la prima de riesgo y los tipos de interés o la pujanza turística ante la inestabilidad de otros destinos alternativos. El agotamiento de estos factores coyunturales positivos condiciona la evolución del crecimiento de la economía española, que ha suavizado su crecimiento hasta el 2,5% de media en 2018 y una previsión del 2,1% en 2019.

La construcción vuelve a encabezar la creación de empleo

El empleo asalariado repunta en febrero impulsado por el alza en la construcción (25.959), educación (20.757) y hostelería (19.694) y lastrado por la pérdida de empleo en comercio (-14.562) tras el fin de la campaña navideña. En términos interanuales la construcción encabeza la creación de empleo en términos absolutos y relativos (8,8%), seguido por educación, sanidad y servicios sociales en el volumen de empleo creado.

La creación de empleo en 2018, con datos del régimen general de la Seguridad Social, se concentra en el sector servicios en cifras absolutas. El aumento interanual del empleo lo encabezan las ramas de educación (66.716 personas) seguida por la construcción (65.411), sanidad y servicios sociales (55.018), industria manufacturera (46.067), hostelería (45.569), comercio (44.596), actividades administrativas y servicios auxiliares (38.914) e información y comunicaciones (36.547).

La creación de empleo en 2018 está encabezada por los servicios públicos, seguidos de cerca por los servicios de bajo valor añadido:

- el 26% en servicios "públicos" (AAPP, educación, sanidad y servicios sociales);
- el 25% en comercio, hostelería y servicios administrativos y auxiliares;
- el 13% en construcción;
- el 9% en industria manufacturera;
- el 7% en servicios de información y comunicaciones;
- el 7% en transporte y almacenamiento;
- el 7% en actividades profesionales, científicas y técnicas.
- el 6% en otras ramas de actividad.

Los datos de la EPA muestran el predominio del sector privado en la creación de empleo en la recuperación (ver tabla #2), con un repunte laboral de mayor intensidad en los sectores que más empleo destruyeron durante la crisis (construcción) y un aumento sostenido y similar en la industria y los servicios de mercado. El sector público ha tardado más en incorporarse a la creación de empleo, herencia de la política de recortes y austeridad y la insuficiente oferta pública de empleo, y su aportación relativa todavía está por debajo de la media.

Tabla #2

El sector privado impulsa la creación de empleo en la recuperación

	4t2018 (miles)	4t2013 (miles)	Variación (miles)	Variación (%)	Empleo creado (distribución %)
Sector Público	3.211	2.909	302	10,4	12%
Sector privado:	16.354	14.226	2.128	15,0	88%
Agricultura	817	770	47	6,1	2%
Industria y energía	2.682	2.315	368	15,9	15%
Construcción	1.272	981	291	29,6	12%
Servicios de mercado	10.966	9.497	1.469	15,5	60%
Empleo doméstico	617	663	-46	-6,9	-2%
TOTAL POBLACIÓN OCUPADA	19.565	17.135	2.429	14,2	130%

Fuente: Gabinete Económico a partir de la EPA

Los datos acumulados de creación de empleo en los últimos cinco años según la EPA (4t2013-4t2018) ofrecen ahora una imagen más diversificada por ramas de actividad de la que había al inicio de la recuperación. En términos relativos, las ramas que más han incrementado su empleo en estos cinco años son actividades inmobiliarias (+73%), construcción (+39%), hostelería (+35%) y actividades artísticas, recreativas y de ocio (+35%) lo que permite identificar las apuestas sobre las que está asentada la actual recuperación económica. El resto de ramas han incrementado su empleo a tasas menores y dos ramas han perdido empleo en estos últimos cinco años: actividades financieras y de seguros (-8%) y hogares que emplean personal doméstico (-7%).

La inmensa mayoría del empleo en España se ubica en sectores de actividad de bajo contenido tecnológico. Los años de recuperación económica muestran que sigue sin consolidarse un cambio real del modelo productivo y de la creación de empleo: el 92% de los puestos de trabajo netos creados pertenecen a actividades de contenido tecnológico bajo y solo el 8% del empleo creado se concentra en ramas de contenido tecnológico medio y alto de la industria y los servicios. Eso explica que en estos casi cinco años de recuperación económica el peso del empleo en sectores de media y alta tecnología apenas haya variado y se mantenga en el 7 por 100.

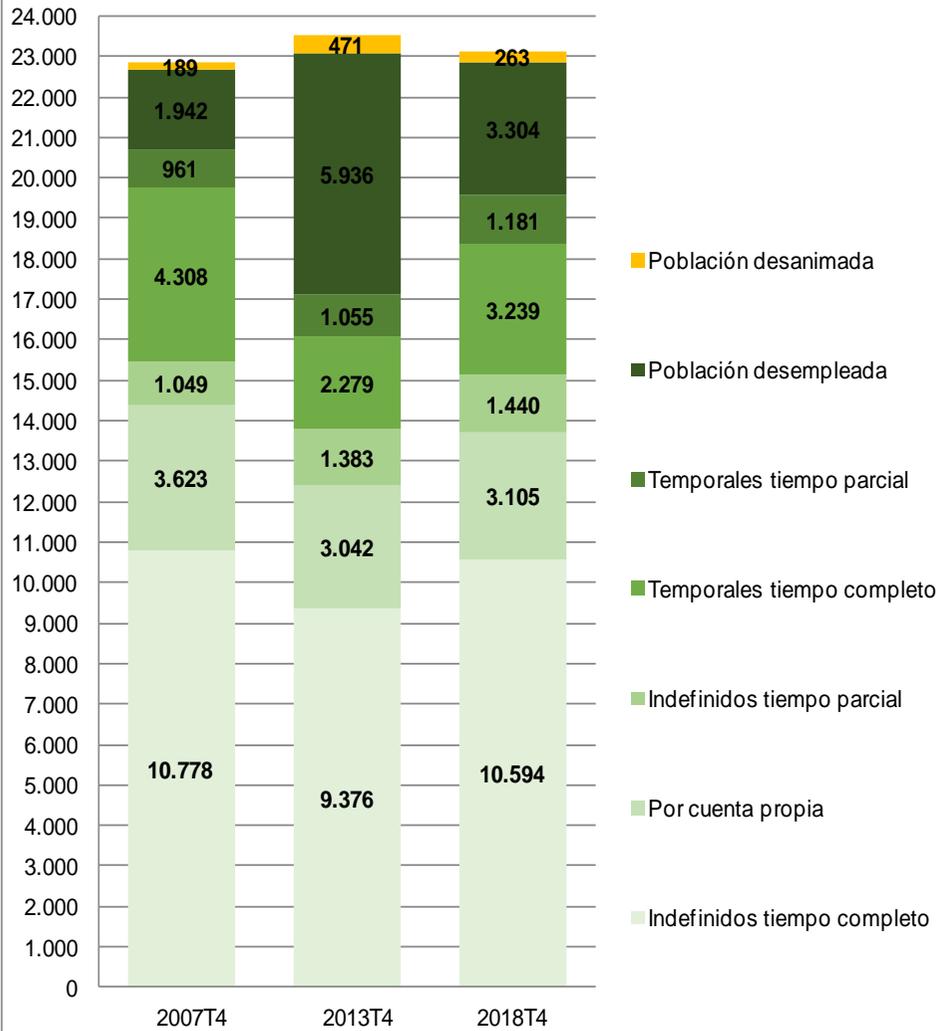
Los gráficos #3 y #4 de la EPA muestran que la reducción del desempleo se está logrando en gran medida a costa de disparar de nuevo los niveles de precariedad en un mercado de trabajo ya muy castigado tras años de crisis y despidos masivos, altas tasas de paro, devaluación salarial, aumento de la explotación laboral y de las horas extras no pagadas,...

El desglose de la población activa en el 4t2018 ofrece una imagen clara de la actual extensión de la precariedad: el 14 por 100 son personas en paro, el 5 por 100 temporales a tiempo parcial, el 14 por 100 temporales a jornada completa, el 6 por 100 indefinidos a tiempo parcial, el 14 por 100 es población ocupada por cuenta propia (un colectivo muy heterogéneo). Solo el 46 por 100 de la población activa tiene un trabajo asalariado indefinido a tiempo completo.

Gráfico #3

Composición de la precariedad laboral

Población activa (miles de personas)

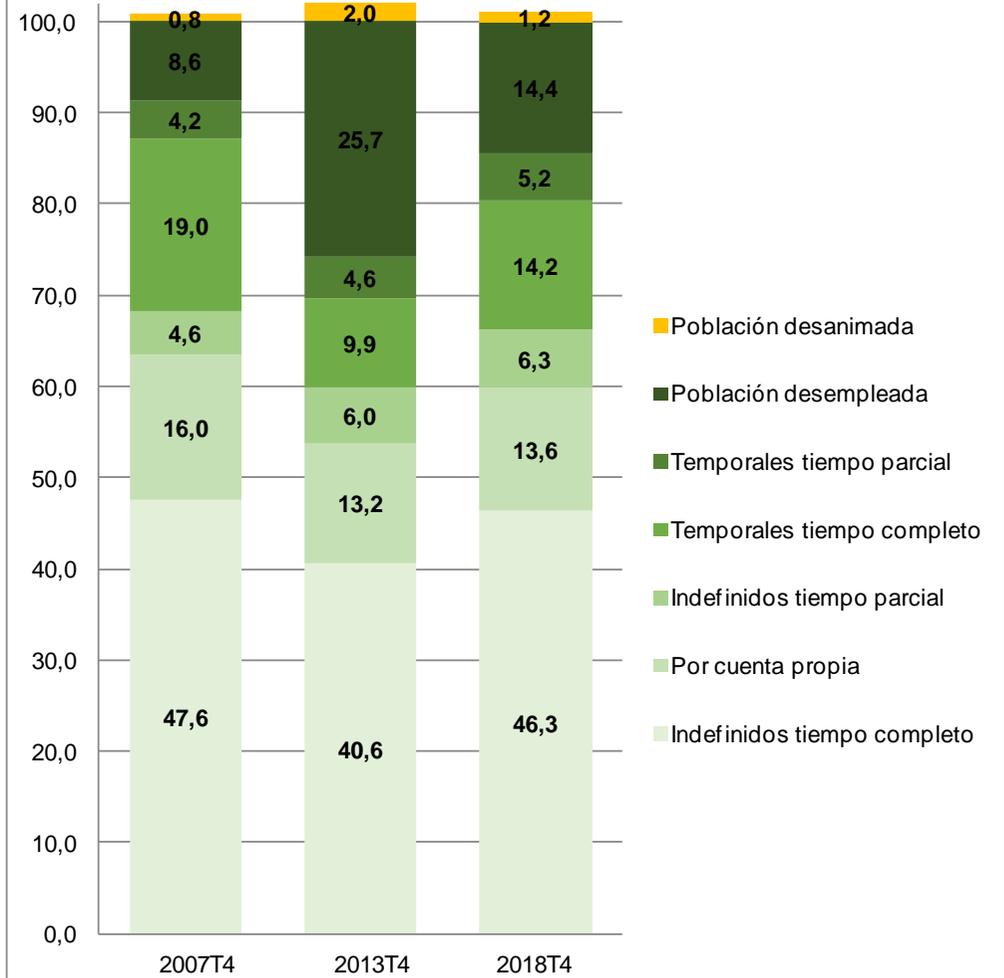


Gabinete Económico de CCOO con datos de la EPA

Gráfico #4

Distribución de la precariedad laboral

Población activa (porcentaje)



Gabinete Económico de CCOO con datos de la EPA

El mercado laboral se encoge y “mejora” las estadísticas

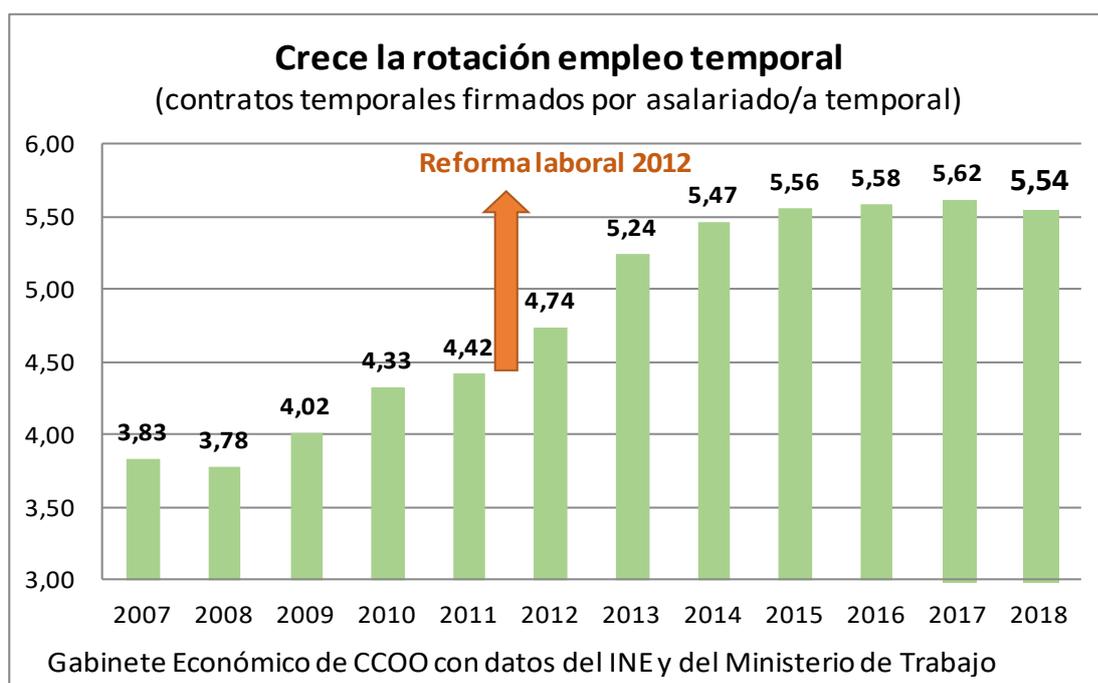
La recuperación económica ha reactivado la creación de empleo -sobre todo el más precario- y el descenso del paro. Pero también es cierto que la pérdida de población activa en edad de trabajar ha ayudado a “mejorar” las estadísticas laborales sobre todo en el final de la crisis y el inicio de la recuperación. La EPA muestra que el descenso del paro es mayor que la creación de empleo y que hay otros factores que explican la bajada del desempleo: en los últimos años ha caído la población (envejecimiento, emigración) por la pérdida de población activa al tiempo que crece la población inactiva (personas desanimadas, que se jubilan,...).

La población activa eran 23,4 millones de personas en el 4t2012 (17,3 millones ocupadas y 6,0 millones en paro) que han bajado hasta 22,9 millones en el 4t2018 (19,6 millones ocupadas y 3,3 millones en paro). En estos seis años el paro ha bajado en 2,7 millones, el empleo ha crecido en 2,2 millones y la población activa ha caído en 492.000 personas, pérdida que se ha concentrado entre los hombres: la población activa ha disminuido 421.000 hombres y 71.000 mujeres. No obstante, todavía hay 1,6 millones menos de mujeres que hombres incorporadas a la actividad, reflejo de las barreras de género que persisten en el acceso al trabajo remunerado y que además “maquilla” las estadísticas laborales de las mujeres.

4. Se consolida la rotación y precariedad del empleo

La **alta rotación laboral de la población con contrato temporal** es un rasgo característico de la precariedad, que ha aumentado con la crisis y sobre todo tras la reforma laboral de 2012. Las personas asalariadas con contrato temporal en 2007 necesitaron firmar una media de 3,8 contratos para poder trabajar durante todo ese año. En 2018 ha sido necesario que firmar 20 millones de contratos temporales para que a final de año hubiera 3,6 millones de personas asalariadas temporales con un contrato firmado en el último año. Es decir, han tenido que firmar 5,5 contratos temporales para trabajar todo el año 2018, reflejo de la mayor rotación en el empleo temporal consolidada tras la reforma laboral (ver Gráfico #6).

Gráfico #5



Tras la reforma laboral de 2012, la rotación cada vez afecta más a la contratación indefinida que se ha vuelto menos estable, como muestra el gráfico #7. El repunte de los contratos indefinidos firmados es simultáneo a su menor supervivencia laboral, lo que consolida una menor eficacia en la creación de empleo indefinido. Ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos empleos indefinidos: en 2009 solo se necesitó firmar 1,1 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que pervivía a fin de año, en 2018 ha sido necesario firmar 1,6 contratos por empleo. Un 37% de los contratos indefinidos firmados en 2018 ha causado baja (despido,...) durante el año y solo el 63% sobrevivían a fin de año (ver gráfico #8). Solo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 seguían activos en el cuarto trimestre de 2018. Nunca antes se habían firmado en España tantos contratos “indefinitos” que no han servido para consolidar empleo estable y de calidad.

Gráfico #6

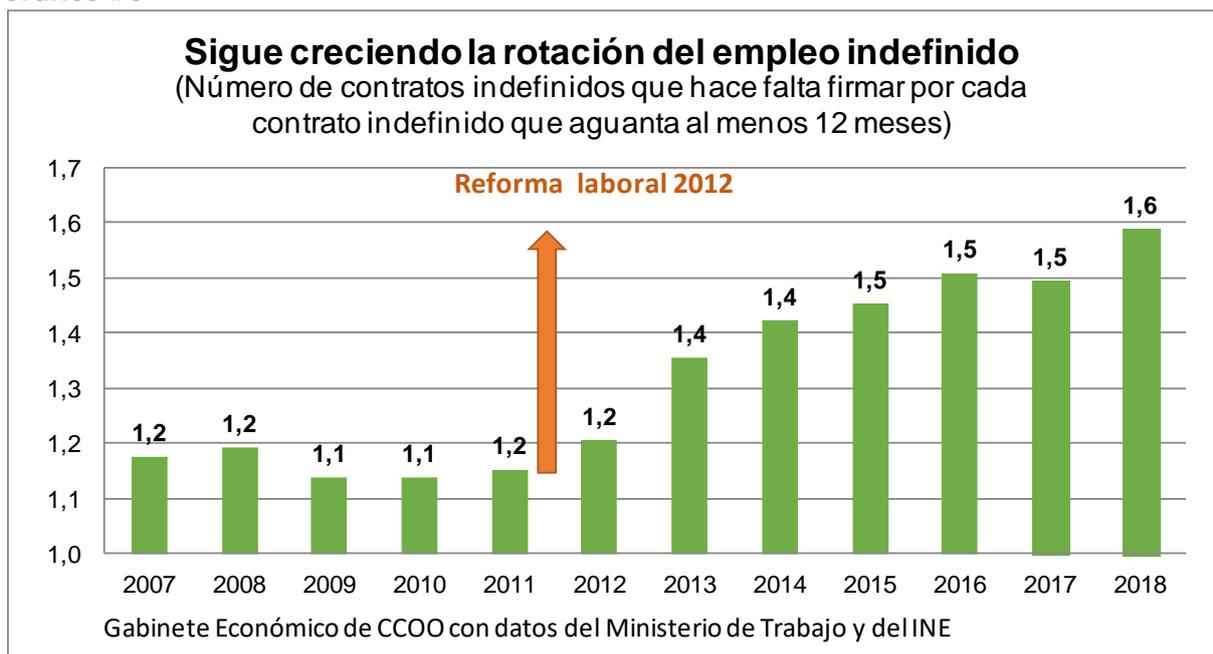
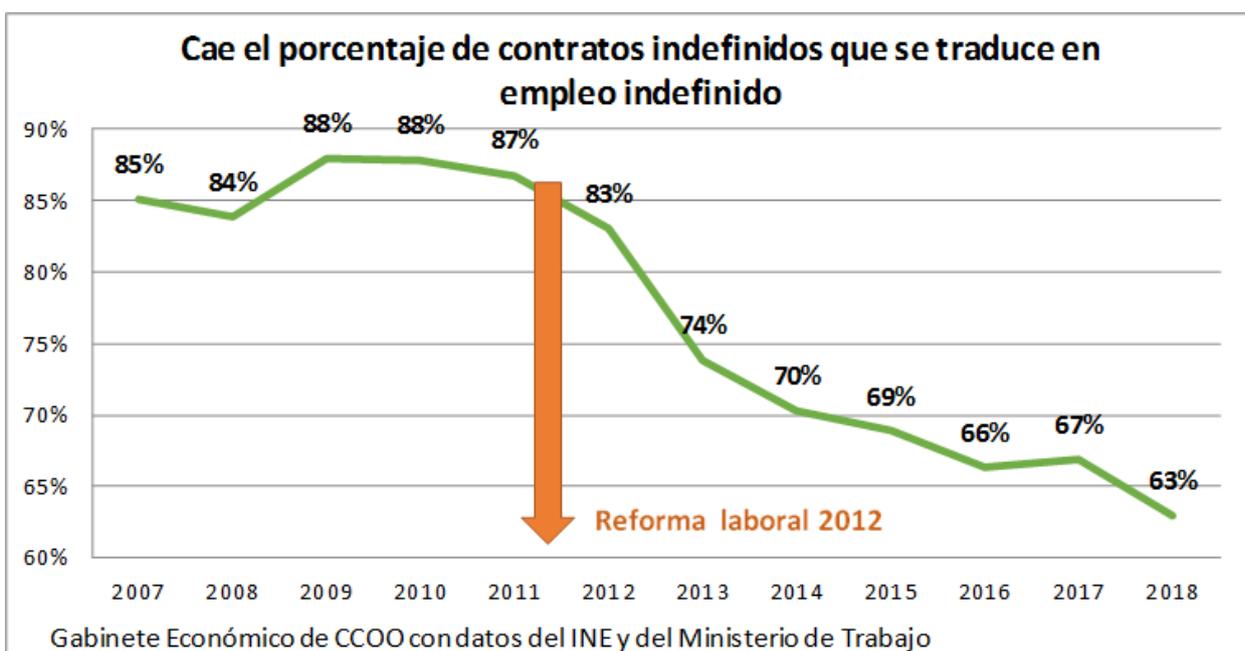


Gráfico #7



La reforma laboral ha transferido una parte significativa del riesgo que implica crear un nuevo empleo desde el empresariado a la clase trabajadora, al hacer recaer sobre ella la mayor parte del coste y de las consecuencias negativas derivadas de las malas decisiones empresariales, a través de una mayor facilidad de despido a un coste menor. El Gobierno en lugar de incentivar y apostar por la mejora del modelo productivo, la inversión y el aumento de la productividad, sigue incidiendo en mejorar la rentabilidad empresarial a costa de comprimir los derechos laborales, "subsidiando" las malas prácticas empresariales más precarias a costa de las buenas prácticas empresariales y los derechos laborales.

Precariedad: el 38% de los contratos se concentra en el 1% de los empleos

La elevada rotación del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran un gran volumen de contratos temporales, muchos de apenas unas horas o días: entre enero y septiembre de 2018 se han firmado 6,26 millones de contratos temporales con una duración igual o inferior a 1 mes, de los que el 70% tenía una duración igual o inferior a 1 semana.

Hay un flujo muy elevado de contratos temporales de corta duración, que se concentra en un número limitado de empleos muy precarizados. Según la EPA en los nueve primeros meses de 2018 una media de 207.000 personas ha trabajado con contratos temporales de duración inferior a 1 mes. Es decir, cada empleo ligado a contratos de muy corta duración ha requerido firmar una media de 3,4 contratos al mes (una media de 30 contratos en estos nueve meses de 2018). Gran parte de los contratos firmados se concentra en un pequeño porcentaje de empleos: el 38 por 100 de todos los contratos firmados entre enero y septiembre de 2018 tenía una duración igual o inferior a 1 mes, pero solo el 1,3 por 100 de la población asalariada estaba trabajando durante ese mismo periodo con contratos de duración inferior a 1 mes.

Los datos de contratación muestran el flujo de acceso a la actividad laboral, pero no proporcionan la foto real del empleo existente, como evidencian los datos de rotación anteriores, donde se necesitan firmar muchos contratos temporales para consolidar el mismo número de jornadas de trabajo que un empleo indefinido. Solo el 0,4% de los contratos temporales tiene una duración firmada superior a 12 meses. Los contratos indefinidos firmados son muchos menos en cifras absolutas, pero debido a su mayor pervivencia, tienen un peso real muy superior en la duración/empleo generado. Valga como ejemplo que un puesto de trabajo puede ser cubierto durante 2018 firmando un solo contrato indefinido o 365 contratos temporales de un día.

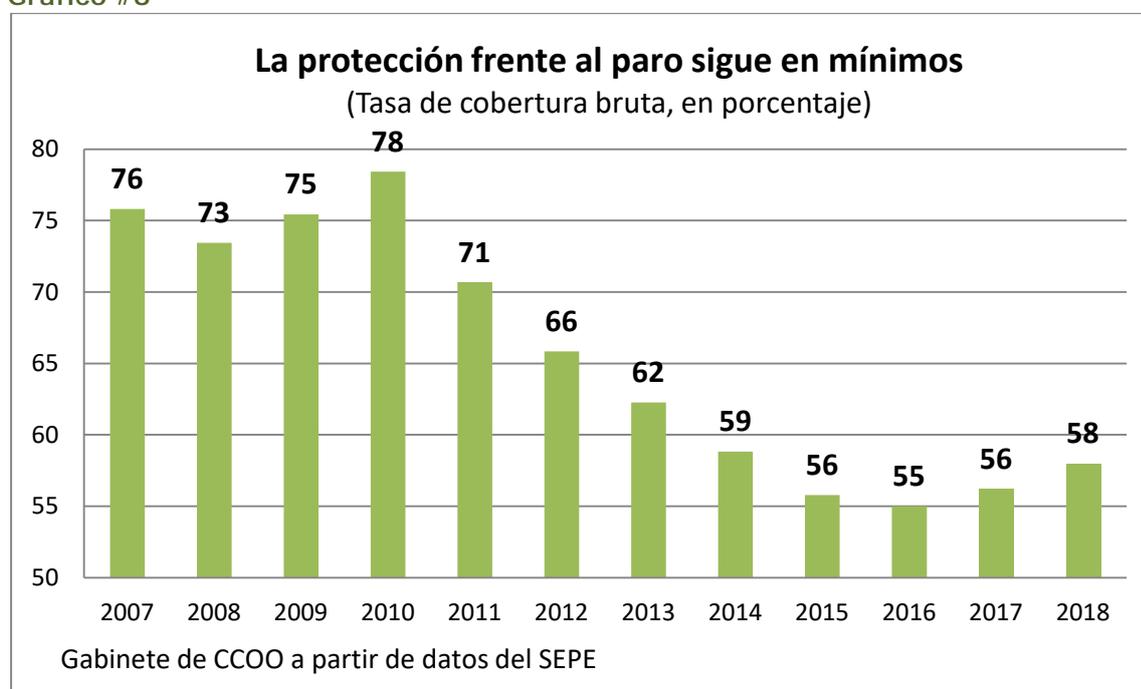
En febrero de 2019 se han registrado 1,57 millones de contratos de trabajo: el 89% temporales y el 11% indefinidos (donde 4 de cada 10 han sido a jornada parcial). En febrero ha caído la contratación indefinida en términos interanuales (-3%) debido al descenso de los contratos indefinidos iniciales mientras que las conversiones han aumentado ligeramente y representan 36 de cada 100 contratos indefinidos.

En el conjunto de 2018 se han firmado 22,3 millones de contratos, nuevo máximo histórico, de los que el 90% han sido temporales y el 10% indefinidos, con un elevado peso de los contratos a jornada parcial (3 de cada 10 temporales, y el 40% de los contratos indefinidos). Los datos de 2018, en el quinto año de la recuperación, evidencian que la contratación sigue marcada por la precariedad y lastrada por los efectos negativos de la reforma laboral de 2012: se firman más contratos que antes de la crisis, pero son más precarios y todavía no se han recuperado todos los empleos destruidos por la recesión.

5. La protección por desempleo es baja y crece la brecha de género

Solo seis de cada diez personas en paro que previamente han trabajado cobran una prestación por desempleo, que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. La tasa de cobertura¹ bruta del desempleo se sitúa en el 61,9% en enero, y a pesar del ligero repunte desde 2017, sigue muy por debajo de los niveles previos a la crisis (ver Gráfico #9). La duración de la crisis y la profunda destrucción de empleo han enquistado el paro de larga duración -que todavía afecta al 47 por 100 de la población en paro- y un descenso de la protección por desempleo, que se refleja tanto en el bajo porcentaje de población en paro que cobra prestación como en el deterioro de su calidad media, por el menor peso de las prestaciones contributivas y la menor cuantía media de la prestación percibida. Este recorte tiene su origen en un sistema de protección que no estaba preparado para una crisis tan profunda y con una duración tan larga, a la que se añaden los recortes ejecutados por anteriores gobiernos y que no se han visto paliados con iniciativas fallidas como el Programa de activación para el empleo.

Gráfico #8



En enero de 2019, la tasa bruta de cobertura del paro de las mujeres (57,4%) está 11 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres (68,1%).

La larga duración de la crisis ha rebajado la tasa de cobertura y además ha empeorado la calidad media de las prestaciones por desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas y perder peso a favor de las asistenciales. Desde 2017 ha mejorado la calidad media de las prestaciones, aunque en enero de 2019 el 55% eran prestaciones asistenciales y solo un 45% contributivas, reflejo de la cronificación del desempleo. En enero 1,36 millones de personas en paro registrado carecían de prestación y 1,93 millones percibían una prestación: 1.071.088 personas cobraban un subsidio, la RAI o el PAE y solo 859.155 la prestación contributiva.

¹ Nuevo indicador de cobertura = Beneficiarios prestaciones/(paro registrado SISPE con experiencia laboral + beneficiarios subsidio eventuales agrarios)

El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, se situó en enero en 883 euros mensuales (5,2% interanual) mientras que la prestación contributiva media por beneficiario se situaba en 835 euros mensuales (0,9% interanual). En 2018 ha aumentado la cuantía media de las prestaciones por desempleo y también ha repuntado el gasto en desempleo, tras acumular un fuerte descenso en los últimos años, impulsado por el aumento del gasto en la prestación contributiva, a pesar del descenso de personas beneficiarias. El gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado a la mitad (-46%) entre 2010 y 2017, bajando desde 32.238 millones (2010) a 17.474 millones (2017). En enero de 2019 el gasto en prestaciones ha repuntado y crece el 4%.

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CCOO

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares) con un peso muy bajo de la industria y los servicios de alto valor añadido, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a su población. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de contenido tecnológico alto, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro, como se ha evidenciado en las etapas de recesión.

El empleo que se crea es en gran medida precario y temporal, lo que sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía de poder llevar una vida independiente o escapar de la pobreza. Es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro. Las mejoras acordadas en el SMI así como el establecimiento de un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales pactada con las organizaciones empresariales deben servir de estímulo para impulsar aumentos salariales en la negociación colectiva y en la calidad del empleo generado.

Cambios en la estructura productiva para un empleo de calidad

Ante este panorama, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro deben ser la base del nuevo modelo.

Impulsar la negociación colectiva y una reforma fiscal progresista

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y las trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad del empleo, exige derogar las dos últimas reformas laborales.

La economía española mantiene su expansión aunque a un ritmo algo más moderado (2,5% interanual en el dato avanzado del 3t2018). Mientras, los beneficios empresariales suben (en 2015 ya se recuperó el excedente empresarial que tenían antes de la crisis) y los dividendos están en máximos, debido a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan.

Con los datos provisionales de 2018, los convenios colectivos cubrían ya a 8,84 millones de personas, con una subida salarial media del 1,75%. La firma del IV AENC 2018-2020 debe servir para fortalecer la negociación colectiva, garantizar el reparto real de la riqueza y beneficiará a más de 10 millones de trabajadores. El AENC busca consolidar la recuperación de los salarios y que ganen poder adquisitivo, especialmente de los salarios más bajos que se verán beneficiados por el establecimiento progresivo de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros por 14 pagas (esta medida se estima que beneficiará a 2 millones de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo).

Impulsar los salarios y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y garanticen la sostenibilidad de las pensiones.

El AENC incide en la imprescindible mejora de los salarios más bajos que ya se inició con el acuerdo para subir el salario mínimo a 850 euros brutos por catorce pagas, y es otro avance en el objetivo de aproximar el SMI al 60 por 100 del salario medio.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida por la población trabajadora de los sectores público y privado durante la recesión. España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Los convenios colectivos negociados deben garantizar la mejora del poder adquisitivo, participar del reparto de la productividad generada e incorporar cláusula de garantía salarial. En el área pública, CCOO insta a la rectificación de todos los recortes laborales y salariales sufridos en el sector público durante la crisis y considera la oferta extraordinaria de empleo público una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos.

Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes.

CCOO reclama una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y fomentando el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que incremente la productividad.

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el corto plazo, al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por eliminar el tope de las bases máximas de cotización por contingencias

comunes y financiar las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

Los presupuestos de 2019 nacieron lastrados por la falta de actualización de la senda de rebaja del déficit público, que el nuevo ejecutivo había pactado con Bruselas y que ampliaba del -1,3% del PIB al -1,8%, el déficit presupuestario para 2019. La revisión era necesaria dada la previsible e importante desviación que, finalmente, se ha producido en 2018 (-2,7% frente a un objetivo del -2,2%), lo que hacía poco verosímil y prudente el objetivo del -1,3% para 2019. A pesar de que la responsabilidad de la desviación de 2018 corresponde al anterior gobierno, el PP y Cs han impedido actualizar la senda de consolidación fiscal dificultando el avance en el reequilibrio de las cuentas públicas (que se debe producir en las etapas de crecimiento y no durante las crisis), al tiempo que se avanza en el impulso de la actividad económica, la creación de empleo y la recuperación de la protección social perdida. Son 6.000 millones con los que no se podrá contar para mejorar la inversión y el gasto social como resultado de la actitud de estas dos fuerzas políticas que con ello orillan los intereses de los ciudadanos y del país.

Mejorar la protección social de la población

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. CCOO, UGT y la mayoría de los Grupos Parlamentarios registraron una Proposición de Ley que pedía **garantizar el poder adquisitivo de las pensiones** en 2017 y que fue rechazada por el Gobierno, y las pensiones perdieron el año pasado 1,7 puntos de poder adquisitivo por la subida de los precios. Es necesario vincular de nuevo la subida de las pensiones al IPC, como acaba de reflejar la recomendación sobre revalorización de las pensiones del Pacto de Toledo.

En paralelo a la mejora del SMI, los incentivos a la contratación deben concentrarse en las personas en paro de larga duración, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura sigue muy baja), poner en marcha un Plan de Choque para la Recuperación de la Población en Paro de Larga Duración e implantar una Prestación de Ingresos Mínimos.

La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guie las decisiones económicas y laborales. En España hay 1,45 millones de personas paradas excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE². Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una **Prestación de Ingresos Mínimos** en el conjunto del estado, como la impulsada por CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados. Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

² La cifra asciende a 2,2 millones de personas con los datos de paro de la EPA del 3t2017.